

**Asamblea General**

Septuagésimo octavo período de sesiones

Documentos Oficiales

Distr. general
24 de enero de 2024
Español
Original: inglés

Tercera Comisión**Acta resumida de la 48ª sesión**

Celebrada en la Sede (Nueva York) el martes 7 de noviembre de 2023 a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Marschik. (Austria)**Sumario**

Tema 60 del programa: Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuestiones relacionadas con los refugiados, los retornados y los desplazados y cuestiones humanitarias (*continuación*)

Tema 68 del programa: Derechos de los Pueblos Indígenas (*continuación*)

a) Derechos de los Pueblos Indígenas (*continuación*)

Tema 70 del programa: Derecho de los pueblos a la libre determinación (*continuación*)

Tema 71 del programa: Promoción y protección de los derechos humanos (*continuación*)

b) Cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales (*continuación*)

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse lo antes posible, con la firma de un miembro de la delegación interesada, a la Jefatura de la Sección de Gestión de Documentos (dms@un.org), e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las actas corregidas volverán a publicarse electrónicamente en el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (<http://documents.un.org>).



Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Tema 60 del programa: Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuestiones relacionadas con los refugiados, los retornados y los desplazados y cuestiones humanitarias (continuación)
(A/C.3/78/L.26 y A/C.3/78/L.28)

Proyecto de resolución A/C.3/78/L.26: Aumento del número de miembros del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

1. **El Presidente** dice que el proyecto de resolución no tiene consecuencias para el presupuesto por programas.

2. **La Sra. Rodríguez Mancía** (Guatemala), presentando el proyecto de resolución, dice que su país es signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Guatemala ratificó la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados y el Pacto Mundial sobre los Refugiados y mantiene su compromiso de impulsar acciones desde el marco integral regional para la protección y soluciones para los refugiados. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es un socio estratégico que contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad; a la construcción de relaciones de confianza y empatía para atender las necesidades de los refugiados, particularmente las personas con necesidad de protección internacional; y al apoyo a quienes se enfrentan a los múltiples retos asociados a la movilidad humana.

3. **El Presidente** dice que se ha solicitado que el proyecto de resolución sea sometido a votación registrada.

4. **La Sra. Rodríguez Mancía** (Guatemala) dice que es sorprendente que se haya pedido una votación. Desde que se empezaron a dar proyectos de resolución procedimentales en 1995, jamás ninguno ha sido puesto a votación y solicitarlo es sentar un mal precedente. En el proyecto de resolución se hace referencia a la decisión 2023/313 del Consejo Económico y Social, relativa al aumento del número de miembros del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y se solicita al ECOSOC que se proceda a la elección del nuevo miembro en 2024. La oradora pide a todas las delegaciones que apoyen el proyecto de resolución y preserven los procedimientos que rigen la Tercera Comisión.

5. *A petición del representante de Libia, se procede a votación registrada sobre el proyecto de resolución A/C.3/78/L.26.*

Votos a favor:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Canadá, Chequia, Chile, Chipre, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Eswatini, Etiopía, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malawi, Malta, Marruecos, México, Mónaco, Montenegro, Nepal, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos (Reino de los), Palau, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República de Moldova, República Democrática del Congo, República Dominicana, República Unida de Tanzania, Rumania, Saint Kitts y Nevis, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sierra Leona, Singapur, Suecia, Suiza, Suriname, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Togo, Trinidad y Tabago, Türkiye, Tuvalu, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

Votos en contra

China, Lesotho, Somalia.

Abstenciones

Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Belarús, Brunei Darussalam, Comoras, Djibouti, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Federación de Rusia, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malasia, Maldivas, Malí, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Namibia, Omán, Pakistán, Qatar, República Árabe Siria, República Democrática Popular Lao, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Túnez, Viet Nam, Yemen.

6. *Por 121 votos contra 3 y 41 abstenciones, queda aprobado el proyecto de resolución A/C.3/78/L.26.*

7. **El Sr. Elsonni** (Libia) dice que su delegación solicitó que el proyecto de resolución fuera sometido a votación registrada en nombre de los miembros del Grupo de los Estados Árabes, que se han abstenido en la consecuente votación. Los países que aspiren a formar parte del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es un órgano noble que se dedica a proteger a los refugiados y a las víctimas de los conflictos, deben ser muy sensibles a las crisis de refugiados y apoyar las cuestiones humanitarias conexas. Sin embargo, en la 41ª sesión del décimo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General, relativo a la Franja de Gaza, Guatemala votó en contra de la aprobación de un proyecto de resolución de carácter puramente humanitario, el proyecto de resolución [A/ES-10/L.25](#) sobre la protección de los civiles y el cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias, en el que también se pedía la protección del personal de las Naciones Unidas. Debido a la guerra en curso, los refugiados palestinos de Gaza son uno de los grupos más vulnerables, y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) ha sido objetivo de Israel, a consecuencia de lo cual decenas de miembros de su personal han perdido la vida. Por tanto, el Grupo no considera que Guatemala cumpla los criterios establecidos en la Carta del ACNUR para formar parte del Comité Ejecutivo. Al votar en contra de la aprobación del proyecto de resolución [A/ES-10/L.25](#), Guatemala demostró su falta de adhesión a los valores humanitarios que rigen el trabajo del Comité Ejecutivo, y el Grupo opina que ese país no respetará los principios de la labor humanitaria y los derechos humanos en la protección de los civiles, los refugiados y las personas vulnerables si es elegido miembro de dicho Comité.

Proyecto de resolución A/C.3/78/L.28: Aumento del número de miembros del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

8. **El Presidente** dice que el proyecto de resolución no tiene consecuencias para el presupuesto por programas.

9. **El Sr. Kyslytsya** (Ucrania), presentando el proyecto de resolución, dice que, recientemente, el ACNUR ha informado de que en 2022 se registró la cifra récord de 108,4 millones de desplazados forzados en todo el mundo, entre otras causas debido a la invasión

a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. La ampliación del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados brinda una oportunidad única para basar las iniciativas del Programa en la unidad, la solidaridad y una cooperación multilateral eficaz.

10. Ucrania lleva desde 2014 enfrentándose a los enormes desafíos que plantean los desplazamientos forzados a una escala sin precedentes, y más de 11 millones de ucranianos siguen desplazados. La amplia experiencia y los conocimientos especializados de Ucrania en el ámbito de la búsqueda de soluciones prácticas a tales desafíos será un activo para el Comité Ejecutivo y respaldará la labor vital que desempeña el ACNUR al proporcionar protección internacional y asistencia humanitaria.

11. La delegación de Ucrania lamenta que, por primera vez, se estén sometiendo a votación proyectos de resolución técnicos y de procedimiento, que ya han sido aprobados por el Consejo Económico y Social. Con ese enfoque, se corre el riesgo de politizar la labor que desempeña el ACNUR al cumplir su mandato humanitario fundamental. Ucrania insta a los Estados Miembros a votar a favor del proyecto de resolución para mostrar su compromiso colectivo de afrontar los urgentes retos mundiales relacionados con los desplazamientos forzados.

12. **El Sr. Mahmassani** (Secretario de la Comisión) dice que las siguientes delegaciones se han sumado a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos (Reino de los), Polonia, Portugal, Rumania y Suecia.

13. A continuación, el Secretario señala que las siguientes delegaciones también desean sumarse a la lista de patrocinadores: Albania, Guatemala, Montenegro y República de Moldova

14. **El Sr. Kashaev** (Federación de Rusia), en explicación de voto antes de la votación, dice que la labor del ACNUR es especialmente valiosa en las crisis humanitarias a gran escala. No obstante, la politización de las actividades humanitarias y de la labor del ACNUR perjudica la cooperación internacional de apoyo a la paz y la seguridad internacionales. En 2014, tras el golpe anticonstitucional en Kyiv y la llegada al poder de nacionalistas ultrarradicales, que desembocó en una guerra civil, Rusia empezó a acoger a cientos de miles de refugiados ucranianos. El éxodo masivo de personas de Ucrania a Rusia ha continuado desde

entonces, debido a los constantes ataques de las fuerzas armadas ucranianas contra zonas civiles de Donbás. El enfoque claramente politizado de Ucrania y los motivos evidentes por los que quiere incorporarse al Comité Ejecutivo no concuerdan con la labor humanitaria del ACNUR y no facilitarán las iniciativas internacionales para proteger y ayudar a los refugiados y otros desplazados. Por tanto, la delegación de la Federación de Rusia solicita que el proyecto de resolución se someta a votación registrada y votará en contra de su aprobación.

15. *A petición del representante de la Federación de Rusia, se procede a votación registrada sobre el proyecto de resolución A/C.3/78/L.28.*

Votos a favor:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bélgica, Belice, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Cabo Verde, Camboya, Canadá, Chequia, Chile, Chipre, Colombia, Comoras, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Eswatini, Etiopía, Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kazajistán, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malasia, Malawi, Maldivas, Malta, Marruecos, México, Micronesia (Estados Federados de), Mónaco, Montenegro, Myanmar, Nepal, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos (Reino de los), Palau, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República de Moldova, República Dominicana, República Unida de Tanzania, Rumania, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sierra Leona, Singapur, Suecia, Suiza, Suriname, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Trinidad y Tabago, Türkiye, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

Votos en contra:

Federación de Rusia, Nicaragua, República Árabe Siria, República Popular Democrática de Corea.

Abstenciones:

Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Belarús, China, Congo, Djibouti, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Jordania, Kuwait, Lesotho, Líbano, Libia, Madagascar, Malí, Mauritania, Mongolia, Namibia, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, República Democrática Popular Lao, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Togo, Túnez, Viet Nam, Yemen.

16. *Por 121 votos contra 4 y 42 abstenciones, queda aprobado el proyecto de resolución A/C.3/78/L.28.*

17. **El Sr. Elsonni** (Libia) dice que el Grupo de los Estados Árabes se ha abstenido en la votación sobre el proyecto de resolución porque sus Estados miembros desean mantener su posición de principios con respecto a las cuestiones de derechos humanos. En la 41ª sesión del décimo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General, Ucrania se abstuvo en la votación del proyecto de resolución A/ES-10/L.25 sobre la protección de los civiles y el cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias, a pesar de que se enfrenta a sus propios problemas humanitarios y de refugiados.

18. **La Sra. García Rico** (España), en nombre de la Unión Europea, lamenta las peticiones de votación sobre proyectos de resolución de naturaleza técnica y de procedimiento. Tanto Guatemala como Ucrania cumplen los tres criterios para ser miembros del Comité Ejecutivo, establecidos en las respectivas resoluciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social. La Unión Europea y sus Estados miembros apoyan la membresía de ambos países.

Declaraciones formuladas en ejercicio del derecho de respuesta

19. **La Sra. Rodríguez Mancía** (Guatemala) dice que su delegación no puede aceptar algunas de las afirmaciones que ha hecho el representante de Libia. La Tercera Comisión no es el foro adecuado para discutir la aprobación de una resolución en el décimo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General. Guatemala invita a todas las delegaciones a leer la declaración en explicación de voto que el país pronunció durante ese período de sesiones y a considerar detenidamente todos los elementos contenidos en ella para entender su posición. Guatemala está dispuesta al diálogo y apoya la existencia de espacios, al margen de la Tercera Comisión, en los que discutir las diferencias de posición.

20. La delegación de Guatemala no puede aceptar que se diga que su país es insensible a las situaciones humanitarias en el mundo. Guatemala lamenta profundamente la situación en que se encuentran la población palestina y la israelí como resultado de los ataques de Hamás, que su delegación condena inequívocamente. Además, espera la liberación inmediata de las personas secuestradas el 7 de octubre de 2023, entre las que se encuentran 30 bebés, y es sensible a la situación humanitaria infligida por las acciones terroristas de Hamás.

21. **El Sr. Elsonni** (Libia) dice que la Tercera Comisión es el lugar adecuado para debatir los principios de los derechos humanos. En el período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General, los derechos humanos y un alto el fuego o tregua en Gaza recibieron un apoyo abrumador, pero Guatemala votó en contra de esas propuestas. La resolución en cuestión no tenía motivaciones políticas, sino que se basaba en salvar vidas y detener toda forma de agresión contra la población de Gaza y el pueblo palestino. Es estremecedor que allí se haya matado a 10.000 personas, entre las que se encuentran 3.000 bebés. La Tercera Comisión es el foro en el que se debaten los derechos humanos, los niños y los conflictos armados y los derechos de las mujeres. Los países defensores de los derechos humanos que deseen apoyar a los refugiados deberían dirigir su atención a la situación de los campamentos de refugiados del UNRWA, muchos de los cuales han sido objetivos deliberados. Los Estados Miembros deben permanecer unidos para detener la agresión en Gaza y salvar vidas. No es posible poner fin al círculo vicioso imperante sin un alto el fuego ni sin hacer frente a las causas profundas de la situación, que no comenzó el 7 de octubre, sino que es consecuencia de siete decenios de dificultades y conflictos.

Tema 68 del programa: Derechos de los Pueblos Indígenas *(continuación)*

a) Derechos de los Pueblos Indígenas *(continuación)* (A/C.3/78/L.20/Rev.1)

Proyecto de resolución A/C.3/78/L.20/Rev.1: Derechos de los Pueblos Indígenas

22. **El Presidente** dice que el proyecto de resolución no tiene consecuencias para el presupuesto por programas.

23. **La Sra. Caldera Gutiérrez** (Estado Plurinacional de Bolivia), presentando el proyecto de resolución, dice que, como resultado del proceso de negociaciones, el texto contiene nuevos elementos relacionados con la

salud, como un llamamiento a los Estados para que apliquen la resolución 76.16 de la Asamblea Mundial de la Salud, de 30 de mayo de 2023, titulada “La salud de los Pueblos Indígenas”. En el proyecto de resolución se observa la importancia que tienen para las mujeres y niñas indígenas los instrumentos internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y se solicita que se convoque un evento de alto nivel para celebrar el décimo aniversario de la aprobación del documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. El uso de mayúsculas iniciales al referirse a los Pueblos Indígenas, tal como fue acordado en la versión en inglés del proyecto de resolución, debe ser reflejado en todos los idiomas oficiales aplicables de las Naciones Unidas.

24. **El Sr. Mahmassani** (Secretario de la Comisión) dice que las siguientes delegaciones se han sumado a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución: Austria, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Chipre, Cuba, El Salvador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta, Panamá, Perú, República Centroafricana, Sudáfrica, Trinidad y Tabago y Ucrania.

25. A continuación, el Secretario señala que Dominica también desea sumarse a la lista de patrocinadores.

26. **La Sra. Zalabata Torres** (Colombia) dice que uno de los elementos acordados en el proyecto de resolución es el mejoramiento de la participación de los Pueblos Indígenas en el seno de las Naciones Unidas, que es un asunto prioritario en la construcción de un mundo más sostenible, justo y pacífico. Su delegación pide al Presidente de la Asamblea General que implemente la decisión de la Asamblea de seguir examinando medidas adicionales para mejorar la participación de los representantes y las instituciones de los Pueblos Indígenas en las reuniones pertinentes de las Naciones Unidas sobre cuestiones que les afectan, tal y como se solicitó originalmente en la resolución 71/321 de la Asamblea General y se reafirma en el proyecto de resolución. Asimismo, la delegación de Colombia hace un llamado a todos los Estados y a los representantes de los Pueblos Indígenas para que participen activamente en las iniciativas destinadas a mejorar las Naciones Unidas.

27. **La Sra. Rios Balbino** (Brasil) dice que el proyecto de resolución mejorará aún más la promoción y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas. Su delegación valora especialmente que el proyecto de resolución resalte la necesidad de involucrar a los Pueblos Indígenas en las cuestiones que los afectan y aliente a los Estados a implementar plenamente la

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

28. **La Sra. Arab Bafrani** (República Islámica del Irán) dice que su delegación reconoce el mérito de aprobar una resolución que dé respuesta a las cuestiones relacionadas con los Pueblos Indígenas y se sumará al consenso. Sin embargo, dicha delegación desea desvincularse de los párrafos decimotercero y decimocuarto del preámbulo y de los párrafos 23 y 32 del proyecto de resolución, ya que contienen terminología no consensuada y polémica, que carece de una definición acordada entre los Estados Miembros y provoca divisiones sobre un asunto importante.

29. Además, la delegación de la República Islámica del Irán considera que las resoluciones de la Asamblea General no exigen que los Estados se adhieran a instrumentos internacionales que no hayan ratificado ni que los apliquen, y que los convenios, convenciones y tratados reafirmados o mencionados en tales resoluciones solo son de aplicación a los Estados partes. Del mismo modo, las resoluciones o los resultados de los órganos subsidiarios y de los órganos principales de las Naciones Unidas no son de aplicación a todos los Estados Miembros.

30. Aunque la República Islámica del Irán apoya el proyecto de resolución, considera que las personas indígenas que migran dejan de ser indígenas y pasan a ser migrantes. En ese sentido, la delegación del país destaca que el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular no es jurídicamente vinculante y reitera que el Pacto es un medio voluntario para mejorar la cooperación entre los Estados Miembros en materia de gestión de corrientes migratorias y no impone ninguna obligación jurídica aparte de las ya contraídas por el Irán. Nada en el Pacto debe interpretarse en el sentido de confundir los refugiados y los migrantes, que constituyen dos grupos distintos que se rigen por marcos jurídicos separados.

31. *Queda aprobado el proyecto de resolución A/C.3/78/L.20/Rev.1.*

32. **El Sr. Ndiaye** (Senegal) dice que los Pueblos Indígenas no deben ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos ni en su plena participación en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El proyecto de resolución refuerza la solidaridad con los Pueblos Indígenas, el reconocimiento de sus derechos y el deber de las instituciones de comprometerse a integrar la promoción y protección de dichos derechos en las políticas y los programas de desarrollo a los niveles nacional, regional e internacional. Aunque se ha sumado al consenso, la delegación del Senegal desea

desvincularse del uso de la expresión “formas múltiples e interseccionales de discriminación”.

33. **El Sr. Mogyorósi** (Hungría) dice que, en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, los Estados deben prestar una atención especial a la promoción y protección de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y de las personas que pertenecen a minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas, que a menudo se enfrentan a dificultades y limitaciones similares al ejercer sus derechos.

34. La delegación de Hungría desea desvincularse del undécimo párrafo del preámbulo. El país votó en contra del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, no participa en su aplicación y no puede aceptar las referencias a él en los documentos internacionales. Además, la definición de las políticas migratorias sigue siendo una prerrogativa nacional y la delegación de Hungría interpreta el proyecto de resolución a la luz de esas consideraciones. Asimismo, dicha delegación se desvincula del párrafo 23, ya que Hungría recopila datos desglosados por sexo y, por tanto, interpreta que el término “género” significa “sexo”.

35. **El Sr. Zumilla** (Malasia) dice que su Gobierno tiene el compromiso de proteger y promover los derechos de los Pueblos Indígenas, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La aprobación por consenso del proyecto de resolución demuestra que los Estados Miembros coinciden en la importancia de proteger y promover los derechos de los Pueblos Indígenas.

36. Aunque la delegación de Malasia se ha sumado al consenso, en el proyecto de resolución se mantiene la expresión “formas múltiples e interseccionales de discriminación”. El Gobierno del país interpretará esa expresión basándose en sus leyes, valores y costumbres nacionales, de modo que excluirá los conceptos que sean incompatibles con la arquitectura internacional de derechos humanos existente.

37. **El Sr. Sylvester** (Reino Unido) dice que su Gobierno siempre ha prestado asistencia política y financiera para el desarrollo económico, social y político de los Pueblos Indígenas y seguirá trabajando a través de las instituciones multilaterales para mejorar su situación. Las personas indígenas tienen derecho a la protección plena de sus derechos humanos y libertades fundamentales en virtud del derecho internacional, en igualdad de condiciones con los demás. Sin embargo, dado que la igualdad y la universalidad son fundamentales para los derechos humanos, la posición

del Reino Unido es, desde hace mucho tiempo, no aceptar el concepto de derechos humanos colectivos en el derecho internacional, según el cual algunos grupos se benefician del disfrute de derechos humanos que no están al alcance de otros, excepto cuando ese concepto se aplica al derecho a la libre determinación. Aunque los Gobiernos de muchos Estados han fortalecido la situación política y económica de los Pueblos Indígenas al otorgarles derechos colectivos a escala nacional, la posición del Reino Unido asegura que las personas que integran un grupo no puedan quedar en situación de vulnerabilidad o desprotección si los derechos de un grupo prevalecen sobre los derechos humanos individuales. Por lo tanto, de conformidad con esa posición, el Reino Unido entiende que las menciones a los derechos de los Pueblos Indígenas acordadas a nivel internacional se refieren a derechos concedidos por los Gobiernos a dichos pueblos a nivel nacional.

38. **La Sra. Dhanutirto** (Indonesia) dice que su Gobierno tiene el compromiso de salvaguardar la identidad cultural de todas las comunidades, incluidos los Pueblos Indígenas. Es importante que el marco internacional de derechos humanos reconozca la diversidad de grupos culturales y sociedades que existe en todo el mundo, entre los que se encuentran también algunos a los que no se aplica el concepto de “Pueblos Indígenas”, como los de Indonesia.

39. La delegación de Indonesia desea desvincularse del párrafo 17 del proyecto de resolución. Es importante garantizar la participación significativa de los Pueblos Indígenas en los mecanismos internacionales, especialmente en los procesos que repercuten directamente en sus medios de vida, pero dichos procesos deben estar firmemente arraigados en modalidades existentes y respetar los principios intergubernamentales de inclusividad y respeto de la soberanía.

40. Asimismo, la delegación de Indonesia desea desvincularse del uso de la expresión “formas múltiples e interseccionales de discriminación”, que no está universalmente aceptada y solo garantiza protección frente a determinados tipos de discriminación. No debe tolerarse ninguna forma de discriminación, e Indonesia mantiene su compromiso de erradicar todas ellas.

41. Por último, la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas debe ajustarse a los marcos jurídicos nacionales para garantizar que sea eficaz y compatible con las culturas y prácticas de cada nación.

42. **El Sr. Grünwald** (Eslovaquia), hablando también en nombre de Bulgaria, Francia y Rumanía, dice que la situación de la salud de los Pueblos Indígenas es muy preocupante, y que la pandemia de enfermedad por

coronavirus (COVID-19) ha afectado especialmente a las mujeres y niñas indígenas. Debe ponerse fin de inmediato a todo tipo de violencia, discriminación y hostigamiento contra los Pueblos Indígenas. Las cuatro delegaciones tienen el firme compromiso de luchar contra el racismo y todas las formas de discriminación e intolerancia y apoyan con decisión el papel que desempeñan los defensores de los derechos humanos, a los que hay que proteger de cualquier clase de intimidación y represalia.

43. Los derechos humanos son derechos universales que corresponden a todos por igual. Las cuatro delegaciones no reconocen los derechos colectivos de ningún grupo definido por su origen, cultura, lengua o creencias. No pueden aceptar, por consiguiente, las referencias que se hacen en el proyecto de resolución a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. Sería preferible hablar de los derechos de las personas pertenecientes a grupos indígenas, de conformidad con los principios de derechos humanos comúnmente reconocidos.

44. **La Sra. Morin** (Canadá), hablando también en nombre de Australia, Islandia, Noruega y Nueva Zelandia, dice que no será posible conseguir un mundo más pacífico, próspero y saludable sin la participación plena, efectiva y significativa de los Pueblos Indígenas, incluidas las mujeres y las niñas, que tienen derecho a participar y asumir un papel de liderazgo en las decisiones que las afectan a nivel mundial, regional y local. Si se potencia dicha participación en los foros de las Naciones Unidas, se hará efectivo el derecho reconocido de los Pueblos Indígenas y de todos los pueblos a la libre determinación. En ese sentido, los Pueblos Indígenas no deben confundirse con las comunidades locales, los grupos minoritarios o las organizaciones de la sociedad civil, y el derecho a la libre determinación debe situarse en el centro del proceso destinado a empoderar a los representantes e instituciones de los Pueblos Indígenas para facilitar su participación mediante la creación de un estatus formal aparte.

45. Las cinco delegaciones acogen con beneplácito el llamamiento que se hace en el proyecto de resolución para que los Estados Miembros adopten las medidas necesarias para garantizar los derechos, la protección y la seguridad de todos los Pueblos Indígenas y para que se investiguen los casos de amenazas, hostigamiento y represalias y los autores rindan cuentas de sus actos. Para garantizar que las Naciones Unidas sean un lugar seguro para todos, se necesitan salvaguardias. Además, las cinco delegaciones agradecen que en el proyecto de resolución se señale que el cambio climático tiene un impacto

desproporcionado en los Pueblos Indígenas, a los que debe darse la oportunidad de compartir sus conocimientos tradicionales y ancestrales y sus conocimientos científicos y técnicos en los preparativos y las respuestas frente al cambio climático.

46. **La Sra. Sillah** (Gambia) dice que su delegación se ha sumado al consenso, pero desea desvincularse de expresiones como “formas múltiples e interseccionales de discriminación”. Esa terminología no se ajusta a los valores de Gambia.

47. **Monseñor Murphy** (Observador de la Santa Sede) dice que es importante reconocer la experiencia específica de los Pueblos Indígenas en ámbitos como la protección del medio ambiente. Por lo tanto, la Santa Sede acoge con beneplácito que el proyecto de resolución destaque el impacto desproporcionado que tiene el cambio climático en los Pueblos Indígenas debido a su dependencia directa de los ecosistemas, entre otras cosas, para satisfacer sus necesidades básicas y participar en actividades tradicionales y económicas. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas afirma el derecho de esos pueblos a valerse de la medicina tradicional y a mantener sus prácticas de salud. La Santa Sede está preocupada por que se intenten imponer por la fuerza modelos de salud predeterminados que no tengan en cuenta las diferencias culturales ni tampoco los contextos y prioridades nacionales ni las limitaciones establecidas en la Declaración. Las recomendaciones generales de los órganos creados en virtud de tratados no emanan de acuerdos entre Gobiernos y son solo una fuente que informa a los Estados partes en una determinada convención sobre las medidas legislativas, políticas y de otros tipos pertinentes que pueden adoptar para aplicar el instrumento.

48. La Santa Sede, en consonancia con su naturaleza y su misión específica, entiende que el término “género” se basa en la identidad y las diferencias sexuales biológicas, es decir, se refiere a hombre o mujer. Además, reconoce que la expresión “formas múltiples e interseccionales de discriminación” no tiene una definición consensuada entre los Gobiernos, de modo que se presta a una interpretación que reduce a la persona humana a sus características particulares y la categoriza según criterios artificiales y selectivos que no están universalmente reconocidos, lo que socava la universalidad de los derechos humanos. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de los derechos humanos y a las libertades fundamentales sin distinción de ningún tipo, como establece el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Tema 70 del programa: Derecho de los pueblos a la libre determinación (continuación) (A/C.3/78/L.29)

Proyecto de resolución A/C.3/78/L.29: Utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación

49. **El Presidente** dice que el proyecto de resolución no tiene consecuencias para el presupuesto por programas.

50. **El Sr. González Behmaras** (Cuba), presentando el proyecto de resolución, dice que el uso de mercenarios y las actividades relacionadas con estos representan un obstáculo para el pleno disfrute de los derechos humanos y una amenaza para la paz, la seguridad y la libre determinación de los pueblos. Esa es la razón por la que su delegación presenta cada año el proyecto de resolución. La versión presentada del texto constituye una actualización técnica de la resolución 77/206 de la Asamblea General y preserva su contenido habitual. Varios Estados Miembros han seguido mostrando su apoyo patrocinando el proyecto de resolución y votando a su favor durante años, enviando con ello un claro mensaje contra el uso de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar la libre determinación. El texto es consecuente con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y debería aprobarse por consenso. En caso de que se solicite una votación al respecto, todas las delegaciones deberían respaldar el proyecto de resolución para ayudar a las Naciones Unidas a abordar esta grave problemática.

51. **El Sr. Mahmassani** (Secretario de la Comisión) dice que las siguientes delegaciones se han sumado a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución: Arabia Saudita, Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, Jamaica, Lesotho, Myanmar, Namibia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas.

52. A continuación, el Secretario señala que las siguientes delegaciones también desean sumarse a la lista de patrocinadores: Argelia, Níger, Nigeria y República Democrática del Congo.

53. **El Sr. Merron** (Estados Unidos de América), en explicación de voto antes de la votación, dice que su delegación condena la grave amenaza que representan algunos grupos armados no estatales para la capacidad de los Estados de proteger y promover los derechos humanos y de mantener el orden. Sin embargo, existe un marcado contraste entre las actividades desestabilizadoras de los mercenarios y la adecuada función que desempeñan las empresas militares y de

seguridad privadas. Los Estados Unidos han defendido sistemáticamente la adopción de enfoques innovadores y eficaces para los marcos y códigos de conducta internacionales a fin de regular las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas. En consecuencia, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación debería centrarse únicamente en la cuestión de los mercenarios, de conformidad con su mandato. Por las razones citadas, la delegación de los Estados Unidos votará en contra del proyecto de resolución y las demás delegaciones deberían hacer lo mismo.

54. *A petición del representante de los Estados Unidos de América, se procede a votación registrada sobre el proyecto de resolución A/C.3/78/L.29.*

Votos a favor:

Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Belice, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chad, Chile, China, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenya, Kirguistán, Kuwait, Lesotho, Libano, Libia, Madagascar, Malasia, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Qatar, República Árabe Siria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suriname, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Votos en contra:

Albania, Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Micronesia (Estados Federados de), Mónaco, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos (Reino de los), Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República de Moldova, Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Türkiye, Ucrania.

Abstenciones:

Kiribati, Liberia, México, Palau, Suiza, Tonga.

55. *Por 126 votos contra 52 y 6 abstenciones, queda aprobado el proyecto de resolución A/C.3/78/L.29.*

56. **El Sr. Escobar** (Argentina) dice que su delegación desea manifestar su pleno apoyo al derecho a la libre determinación de los pueblos que siguen sometidos a dominación colonial y ocupación extranjera, en concordancia con las resoluciones de la Asamblea General 1514 (XV) y 2625 (XXV). La libre determinación requiere, para su ejercicio, un sujeto activo, esto es un pueblo sujeto a subyugación, dominación y explotación extranjera según lo previsto en el párrafo 1 de la resolución 1514 (XV). De no existir dicho sujeto, no hay derecho a la libre determinación. Del mismo modo, el proyecto de resolución que acaba de ser aprobado debe interpretarse y aplicarse de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Comité Especial encargado de Examinar la Situación con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales.

57. **El Sr. Kumaria** (Reino Unido) dice que su delegación reconoce la importancia de dar una respuesta a la cuestión de las actividades de los mercenarios y los agentes afines, y de garantizar que dichos agentes rindan cuentas por los abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, preocupa a su país que en el proyecto de resolución se confundan de manera poco constructiva las funciones y acciones de los mercenarios, según se definen en el derecho internacional humanitario, con las de las empresas militares y de seguridad privadas. Las empresas de esa índole que son responsables, respetan la ley y cumplen altos niveles de exigencia en sus actividades son vitales para la protección de misiones diplomáticas,

empresas y organizaciones no gubernamentales, en particular las que desarrollan su labor en entornos complejos y peligrosos, y las normas aplicables pertinentes se reseñan en el Documento de Montreux sobre las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los Estados en lo que respecta a las operaciones de las empresas militares y de seguridad privadas durante los conflictos armados. Los debates sobre esas empresas deben reservarse al grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar el contenido de un marco normativo internacional para la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas.

58. El Reino Unido reconoce que no cabe duda de que se necesita un proyecto de resolución para hacer frente a la cuestión de los mercenarios y las actividades relacionadas con ellos, pero el hecho de que el texto se refiera a las empresas militares y de seguridad privadas solo sirve para oscurecer su propósito y socava los objetivos del grupo de trabajo. El país hizo varias propuestas para solucionar esos problemas del proyecto de resolución y garantizar una mayor claridad conceptual, pero todas ellas fueron rechazadas. Por esas razones, ha votado en contra del proyecto de resolución. La delegación del Reino Unido tiene el compromiso de continuar dialogando con otros Estados sobre el proyecto de resolución y espera que sus propuestas se tengan en cuenta en el futuro.

59. **La Sra. Nishihara** (Chile) dice que su delegación ha apoyado tradicionalmente tanto el proyecto de resolución como una resolución similar presentada ante el Consejo de Derechos Humanos. El uso de mercenarios presenta una amenaza para los derechos humanos de las personas que viven en situaciones de conflicto armado y para el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

60. Sin embargo, preocupa a Chile que, en sus sucesivas versiones, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Derechos Humanos, el proyecto de resolución ha puesto un énfasis cada vez mayor en la soberanía estatal y la protección de la institucionalidad y no en materias relacionadas con la autodeterminación como garantía crucial para la promoción y protección de los derechos humanos.

61. Chile ha continuado votando a favor del proyecto de resolución y confía en que la Asamblea General lo trate adecuadamente. Las futuras versiones del texto deberían abordar de mejor manera el impacto que el uso

de mercenarios tiene en la garantía del derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, y la amenaza que representa para grupos vulnerables, como los niños, los jóvenes, las mujeres y las minorías raciales y étnicas. Chile pide que se reformule el proyecto de resolución para que enfrente esas materias de forma más adecuada y sea posible alcanzar un mayor acuerdo en el seno de la Asamblea.

Tema 71 del programa: Promoción y protección de los derechos humanos *(continuación)*

b) Cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales *(continuación)* (A/C.3/78/L.32, A/C.3/78/L.33, A/C.3/78/L.35, A/C.3/78/L.37, A/C.3/78/L.38, A/C.3/78/L.44, A/C.3/78/L.45 y A/C.3/78/L.46)

Proyecto de resolución A/C.3/78/L.32: Promoción de un orden internacional democrático y equitativo

62. **El Presidente** dice que el proyecto de resolución no tiene consecuencias para el presupuesto por programas.

63. **El Sr. González Behmaras** (Cuba), presentando el proyecto de resolución, dice que la pandemia de COVID-19 y otros retos mundiales han demostrado que el orden internacional vigente reproduce los privilegios de los países ricos y la exclusión del mundo en desarrollo. El proyecto de resolución se corresponde en su mayoría con la resolución equivalente aprobada durante el septuagésimo séptimo período de sesiones (resolución 77/215 de la Asamblea General). Tras unas negociaciones transparentes y abiertas sobre el proyecto de resolución, se ha hecho hincapié en la necesidad de aumentar los esfuerzos para implementar los compromisos asumidos en la Declaración y el Programa de Acción de Viena y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

64. Contar con un orden internacional más justo, democrático y equitativo debería ser un objetivo común de todos los Estados Miembros y una plataforma compartida para continuar avanzando en la promoción y protección de los derechos humanos. El proyecto de resolución debería aprobarse por consenso, pero, en caso de que se solicite una votación al respecto, todas las delegaciones deberían votar a favor.

65. **El Sr. Mahmassani** (Secretario de la Comisión) dice que las siguientes delegaciones se han sumado a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución: Bahamas, Bolivia (Estado Plurinacional de), Burundi, Congo, Djibouti, Egipto, El Salvador, Eritrea, Irán

(República Islámica del), Jamaica, Malasia, Myanmar, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Sri Lanka, Sudáfrica, Uganda y Zimbabwe.

66. A continuación, el Secretario señala que las siguientes delegaciones también desean sumarse a la lista de patrocinadores: Argelia, Burkina Faso, Camerún, Comoras, Gambia, Guinea, India, Malí, Níger, Nigeria y Pakistán.

67. **El Sr. Merron** (Estados Unidos de América), en explicación de voto antes de la votación, dice que el Gobierno de los Estados Unidos está comprometido con la defensa de los principios e instituciones democráticos en todo el mundo, pero su delegación expresa su preocupación por la premisa general del proyecto de resolución y aspectos específicos del texto. Por esas razones, ha solicitado una votación y votará en contra de la aprobación del proyecto de resolución.

68. *A petición del representante de los Estados Unidos de América, se procede a votación registrada sobre el proyecto de resolución A/C.3/78/L.32.*

Votos a favor:

Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Belice, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chad, China, Colombia, Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Líbano, Libia, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Qatar, República Árabe Siria, República Centroafricana, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suriname, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Togo, Tonga,

Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Uganda, Uzbekistán, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Votos en contra:

Albania, Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Micronesia (Estados Federados de), Mónaco, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos (Reino de los), Palau, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República de Moldova, Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Türkiye, Ucrania.

Abstenciones:

Armenia, Chile, Costa Rica, Liberia, México, Perú, Uruguay.

69. *Por 123 votos contra 54 y 7 abstenciones, queda aprobado el proyecto de resolución A/C.3/78/L.32.*

Proyecto de resolución A/C.3/78/L.33: Fortalecimiento de las actividades de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos mediante el fomento de la cooperación internacional y la importancia de la no selectividad, la imparcialidad y la objetividad

70. **El Presidente** dice que el proyecto de resolución no tiene consecuencias para el presupuesto por programas.

71. **El Sr. González Behmaras** (Cuba), presentando el proyecto de resolución, dice que es urgente asegurar que los principios de universalidad, objetividad y no selectividad guíen la consideración de la cuestión de los derechos humanos. En su mayoría, el proyecto de resolución constituye una actualización técnica de la resolución 76/164 de la Asamblea General, pero se ha introducido lenguaje para visibilizar el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 30º aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Viena. El texto se corresponde con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y debería aprobarse por consenso. En caso de que se solicite una votación al respecto, todas las delegaciones deberían respaldar el proyecto de resolución.

72. **El Sr. Mahmassani** (Secretario de la Comisión) dice que las siguientes delegaciones se han sumado a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución: Bahamas, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, Haití, Irán (República Islámica del), Jamaica, Namibia, Nicaragua, República Dominicana, Rwanda, San Vicente y las Granadinas, Sri Lanka, Túnez, Uganda y Zimbabwe.

73. A continuación, el Secretario señala que las siguientes delegaciones también desean sumarse a la lista de patrocinadores: Argelia, Burundi, Camerún, Comoras, India, Malí, Níger, Nigeria, Pakistán, República Unida de Tanzania y República Democrática del Congo.

74. *Queda aprobado el proyecto de resolución A/C.3/78/L.33.*

Proyecto de resolución A/C.3/78/L.35: El derecho a la alimentación

75. **El Presidente** dice que el proyecto de resolución no tiene consecuencias para el presupuesto por programas.

76. **El Sr. González Behmaras** (Cuba), presentando el proyecto de resolución, dice que el hambre constituye un ultraje a la dignidad humana. No es aceptable que la comunidad internacional cuente con los recursos, conocimientos y tecnologías necesarios para evitar que haya seres humanos que padezcan hambre y que, sin embargo, haya millones de hambrientos en el mundo.

77. El texto del proyecto de resolución se corresponde en su mayoría con la resolución equivalente aprobada durante el septuagésimo séptimo período de sesiones (resolución 77/217 de la Asamblea General). Se ha introducido un nuevo lenguaje para fortalecer las referencias a la Declaración y el Programa de Acción de Viena y a la Declaración Universal de Derechos Humanos con motivo de sus 30º y 75º aniversarios, respectivamente. Todos los nuevos elementos son el resultado de negociaciones transparentes y abiertas.

78. La promoción y protección del derecho a la alimentación debería ser un objetivo compartido por todos, más allá de cualquier consideración política. El proyecto de resolución debería continuar aprobándose por consenso, lo que enviaría el inequívoco mensaje de que resulta imprescindible eliminar la paradoja ética de un mundo que produce alimentos más que suficientes, pero en el que hay millones de personas que padecen hambre. En caso de que se solicite una votación, todas las delegaciones deberían respaldar el proyecto de resolución.

79. **El Sr. Mahmassani** (Secretario de la Comisión) dice que las siguientes delegaciones se han sumado a la lista de patrocinadores del proyecto de resolución: Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Chequia, Chipre, Colombia, Congo, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Finlandia, Grecia, Guyana, Honduras, Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Italia, Jamaica, Kazajistán, Kenya, Lesotho, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Marruecos, México, Mónaco, Mongolia, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Noruega, Países Bajos (Reino de los), Panamá, Perú, Polonia, República de Moldova, República Dominicana, Rumania, Rwanda, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Túnez, Türkiye, Uganda y Zimbabwe.

80. A continuación, el Secretario señala que las siguientes delegaciones también desean sumarse a la lista de patrocinadores: Angola, Argelia, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Chad, Comoras, Gambia, Guinea, India, Kiribati, Maldivas, Malí, Níger, Nigeria, Pakistán, Paraguay, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Timor-Leste, Trinidad y Tabago y Zambia.

81. **El Sr. Kumaria** (Reino Unido) dice que su Gobierno sigue reconociendo los derechos definidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene el compromiso de cumplir sus obligaciones en virtud de dicho instrumento y adopta medidas legislativas y administrativas para hacer efectivos de manera progresiva todos los derechos recogidos en él.

82. El Gobierno del Reino Unido no ha incorporado el Pacto a su legislación nacional, y el artículo 2 del instrumento no obliga a los Estados partes a hacerlo. Por consiguiente, el país considera que el método de aplicación que está utilizando cumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 1). Su delegación no cree que vaya a ser útil elaborar un informe para examinar el papel que desempeña la arquitectura financiera internacional en la realización del derecho a la alimentación, como se pide en el proyecto de resolución. A pesar de las cuestiones mencionadas, el Reino Unido respalda el proyecto de resolución y se sumará al consenso.

83. *Queda aprobado el proyecto de resolución A/C.3/78/L.35.*

84. **El Sr. Pilipenko** (Belarús) dice que su delegación celebra que se haya aprobado el proyecto de resolución por consenso. El derecho a la alimentación es un derecho fundamental de todas las personas, garantiza el bienestar físico y constituye la base del desarrollo, la educación y la prosperidad. Sin embargo, decenas de millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a una alimentación adecuada. En 2022, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación describió la situación como una tormenta perfecta, en la que concurrían factores con repercusiones críticas en una situación ya de por sí difícil.

85. Algunos de esos factores han surgido por obra de Estados concretos. Por ejemplo, las medidas coercitivas unilaterales suponen una grave amenaza y, en ocasiones, un obstáculo insalvable para el disfrute del derecho a la alimentación, al restringir el acceso a los alimentos y crear crisis humanitarias que afectan a los más vulnerables. Como la falta de fertilizantes potásicos disminuye la fertilidad del suelo, las restricciones unilaterales que se han impuesto a los fertilizantes de ese tipo procedentes de Belarús han afectado enormemente a la producción agrícola de varios Estados y han tenido consecuencias catastróficas para la seguridad alimentaria de regiones enteras. El Secretario General, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Grupo Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos y el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación señalan ese problema con regularidad. Por ello, la delegación de Belarús pide que se ponga fin de forma total, inequívoca e irreversible al uso de medidas coercitivas unilaterales.

86. Es importante aumentar la cooperación internacional, y Belarús, que lleva mucho tiempo realizando actividades bilaterales, está dispuesta a ayudar a todos los países interesados en alcanzar la seguridad alimentaria. Juntos, los Estados Miembros pueden crear un mundo en el que nadie padezca hambre ni malnutrición y en el que el respeto de los derechos humanos básicos sea un principio fundamental para todas las naciones.

87. **El Sr. Ono** (Japón) dice que su país reconoce la importancia del derecho a la alimentación y se ha sumado al consenso desde una perspectiva amplia. Sin embargo, su delegación desea expresar su preocupación por la referencia que se hace en el proyecto de resolución a la arquitectura financiera internacional. Los debates sobre las instituciones financieras internacionales y la arquitectura financiera

internacional deben tener lugar en un foro más adecuado que la Tercera Comisión, que se ocupa de deliberar sobre cuestiones de derechos humanos.

88. **El Sr. Merron** (Estados Unidos de América) dice que nunca ha sido tan necesario adoptar medidas para combatir la inseguridad alimentaria, que, como reto mundial, requiere una solución mundial. Los Estados Unidos seguirán liderando la respuesta a la crisis, al tiempo que los Estados Miembros se unen para apoyar a los más necesitados. La seguridad alimentaria es esencial para una mayor paz y prosperidad y, desde enero de 2021, los Estados Unidos han dedicado más de 17.500 millones de dólares a asistencia humanitaria y para el desarrollo que es vital y está destinada a establecer sistemas alimentarios resilientes, aumentar la producción agrícola sostenible y salvar vidas mediante intervenciones de emergencia y programas bilaterales de la iniciativa emblemática del país sobre el hambre en el mundo.

89. El proyecto de resolución reconoce con acierto las dificultades a las que se enfrentan millones de personas y pide a los Estados que apoyen los llamamientos humanitarios de emergencia de las Naciones Unidas. No obstante, el texto contiene redacción problemática e inadecuada que no se centra en los derechos humanos. La delegación de los Estados Unidos también expresa su decepción por que los facilitadores del proyecto de resolución hayan aceptado muy pocas de las modificaciones propuestas por diversas delegaciones. Aunque no impedirá la aprobación del texto por consenso, la delegación del orador desea desvincularse del decimotercer párrafo del preámbulo y del párrafo 24.

90. Asimismo, preocupa a la delegación de los Estados Unidos que la nueva redacción que alude a la “arquitectura financiera internacional” no tenga un significado acordado internacionalmente. El acceso a una financiación adecuada y apropiada no debe confundirse con la arquitectura financiera internacional, independientemente de cómo se defina esta. Los Estados Unidos apoyan firmemente la movilización de financiación para transformar los sistemas alimentarios y se han mostrado muy receptivos a las peticiones de apoyo y reforma, entre otras cosas mediante la defensa de la evolución de los bancos multilaterales de desarrollo.

91. Los Estados Unidos reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, lo que incluye la alimentación, como se refleja en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La posición de la delegación del país sobre el Pacto y otras cuestiones se detalla en su declaración

general pronunciada el 3 de noviembre de 2023 (véase [A/C.3/78/SR.47](#)), a la que también se podrá acceder en el sitio web de la Misión de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

Proyecto de resolución A/C.3/78/L.37: Fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos

92. **El Presidente** dice que el proyecto de resolución no tiene consecuencias para el presupuesto por programas.

93. **El Sr. González Behmaras** (Cuba), presentando el proyecto de resolución en nombre del Movimiento de Países No Alineados, dice que el proyecto de resolución está dirigido a fortalecer el espíritu de cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos. El texto representa en su mayoría una actualización técnica de la resolución aprobada en el septuagésimo séptimo período de sesiones. No obstante, se introduce lenguaje sobre la necesidad de fortalecer los esfuerzos encaminados a implementar la Declaración y el Programa de Acción de Viena y la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Movimiento espera que se mantenga el espíritu constructivo de diálogo y cooperación gracias al cual el proyecto de resolución ha recibido apoyo durante años y que este continúe aprobándose por consenso.

94. **El Sr. Mahmassani** (Secretario de la Comisión) dice que El Salvador se ha sumado a los patrocinadores del proyecto de resolución.

95. *Queda aprobado el proyecto de resolución A/C.3/78/L.37.*

96. **El Sr. Merron** (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos siguen apoyando el aumento de la cooperación internacional para promover la protección y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, la delegación de los Estados Unidos se desvincula del quinto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución porque en él se afirma de manera incorrecta que el fortalecimiento de la cooperación internacional es esencial para conseguir la promoción y la protección efectivas de todos los derechos humanos. Aunque la cooperación internacional puede ayudar a promover el cumplimiento de los derechos humanos, la promoción y protección de los derechos humanos siguen siendo responsabilidades primordiales de cada Estado. Además, las obligaciones y compromisos de los Estados en materia de derechos humanos no están supeditados a la cooperación internacional, y la ausencia de dicha cooperación no justifica el incumplimiento de dichas obligaciones y compromisos. Del mismo modo, tampoco puede invocarse la falta de

desarrollo como justificación para limitar los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Además, la Declaración y Programa de Acción de Viena es un documento no vinculante, algo que no resta valor a sus importantes objetivos, pero sí significa que no crea obligaciones para los Estados. Los Estados Unidos y otros países también tienen preocupaciones de larga data en cuanto a ciertos elementos de la Declaración y el Programa de Acción de Durban que señalan al Estado de Israel y contienen restricciones demasiado amplias de la libertad de expresión.

Proyecto de resolución A/C.3/78/L.38: La promoción de la distribución geográfica equitativa en la composición de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos

97. **El Presidente** dice que el proyecto de resolución no tiene consecuencias para el presupuesto por programas.

98. **El Sr. González Behmaras** (Cuba), presentando el proyecto de resolución en nombre del Movimiento de Países No Alineados, dice que el texto representa en su mayoría una actualización técnica de la resolución aprobada en el septuagésimo sexto período de sesiones. En el proyecto de resolución se reconoce que la distribución geográfica equitativa en la composición de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos es esencial para su funcionamiento eficaz. En ese sentido, el desequilibrio regional que existe en la composición actual, que favorece a un grupo regional en particular, es motivo de preocupación. En el texto se reafirma la importancia de las particularidades nacionales y regionales y de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, así como de los diferentes sistemas políticos, económicos y jurídicos.

99. Se ha introducido lenguaje para subrayar la necesidad de fortalecer los esfuerzos por aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Viena y la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como sobre la importancia de la universalidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos, y la eliminación del doble rasero. Todos los nuevos elementos son el resultado de negociaciones celebradas de forma transparente y abierta. En esencia, el proyecto de resolución está dirigido a promover la cooperación internacional, el multiculturalismo, el pluralismo y el reconocimiento y respeto de la diversidad de los Estados Miembros, en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas, por lo que se debería aprobar por consenso.

100. **El Presidente** dice que se ha solicitado que el proyecto de resolución sea sometido a votación registrada.

101. **El Sr. González Behmaras** (Cuba) pregunta qué delegación ha solicitado una votación sobre un proyecto de resolución que promueve el respeto del multiculturalismo en el seno de una organización multicultural como las Naciones Unidas.

102. **El Presidente** dice que la votación registrada ha sido solicitada por la delegación de los Estados Unidos de América.

103. **El Sr. Merron** (Estados Unidos de América), en explicación de voto antes de la votación, dice que, como en años anteriores, a los Estados Unidos les sigue preocupando que el proyecto de resolución pretenda establecer requisitos para la selección de expertos de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y para su elección, pues esos requisitos ya están establecidos en los tratados correspondientes. La delegación de los Estados Unidos cree firmemente que los órganos creados en virtud de tratados se benefician de contar con expertos de todo el mundo, incluso los que proceden de culturas y sistemas jurídicos muy diversos. Esa diversidad se observa en su composición actual. Dado que ya se había alcanzado un consenso para cada uno de los órganos creados en virtud de tratados en cuanto a las consideraciones que se aplican a la elección de sus miembros, sería inapropiado que la Asamblea General sustituyera su juicio por el de los Estados partes pertinentes. Los órganos creados en virtud de tratados deben seguir siendo independientes y objetivos en su trabajo y estar libres de interferencias políticas o de otro tipo. El proyecto de resolución podría socavar esa independencia y, en última instancia, la percepción de objetividad e independencia de su labor. Por esas razones, la delegación de los Estados Unidos votará en contra del proyecto de resolución e insta a las demás delegaciones a que hagan lo mismo.

104. *A petición del representante de los Estados Unidos de América, se procede a votación registrada sobre el proyecto de resolución A/C.3/78/L.38.*

Votos a favor:

Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Belice, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chad, Chile, China, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes

Unidos, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Líbano, Libia, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Qatar, República Árabe Siria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suriname, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Votos en contra:

Albania, Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Micronesia (Estados Federados de), Mónaco, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos (Reino de los), Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República de Moldova, Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Türkiye, Ucrania.

Abstenciones:

Ninguna.

105. *Por 128 votos contra 52, queda aprobado el proyecto de resolución A/C.3/78/L.38.*

106. **La Sra. Alonso Giganto** (España), hablando en nombre de la Unión Europea, dice que la Unión Europea y sus Estados miembros reconocen plenamente la importancia de la distribución geográfica equitativa en lo que respecta a la composición de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. La composición de los órganos creados en virtud de

tratados y la elección de sus miembros se rigen por las disposiciones establecidas en cada tratado. Algunos tratados hacen referencia a la distribución geográfica equitativa, así como a los principales sistemas jurídicos, y otros no. No corresponde a la Asamblea General modificar las disposiciones de los tratados, y tampoco debería pedir a los Estados partes que lo hagan. Además, los expertos de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos son elegidos a título personal, no como representantes de Estados o grupos regionales. La Unión Europea acoge con satisfacción el debate sobre la forma de atraer a los mejores expertos posibles, pero la decisión sobre quién debe ser elegido como experto debe basarse en las disposiciones establecidas en los propios tratados, así como en los méritos de los candidatos.

107. La Unión Europea se opone a la idea del establecimiento de cuotas por regiones geográficas para los órganos de tratados. En su resolución 68/268, la Asamblea General reafirma que la independencia y la imparcialidad de los miembros de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos es esencial para que puedan cumplir sus deberes. Lamentablemente, el proyecto de resolución no reitera ese importante punto. Por esas razones, los Estados miembros de la Unión Europea han votado en contra del proyecto de resolución.

108. **La Sra. Morin** (Canadá) dice que el sistema de órganos creados en virtud de tratados es fundamental para contar con un sistema de derechos humanos sólido y eficaz que pueda cumplir su papel esencial de vigilancia y protección internacional de los derechos humanos. Sin embargo, la delegación del Canadá mantiene su preocupación de larga data por el hecho de que los objetivos del proyecto de resolución, en particular el concepto de un sistema de cuotas para determinar la composición de los órganos internacionales creados en virtud de tratados, quedan fuera del mandato de la Asamblea General.

109. El Canadá reafirma su compromiso de mantener un diálogo constructivo con las entidades del sistema internacional de derechos humanos, y seguirá apoyando activamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su empeño por lograr las reformas necesarias. Los resultados de esas reformas tendrán profundas repercusiones a la hora de determinar si el sistema puede superar los desafíos a los que se enfrenta y cumplir eficazmente su mandato. El proceso de reforma de los órganos de tratados repercutiría en la cuestión más amplia de la simplificación del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidos el examen periódico universal y los procedimientos especiales.

Proyecto de resolución A/C.3/78/L.44: Derechos humanos y diversidad cultural

110. **El Presidente** dice que el proyecto de resolución no tiene consecuencias para el presupuesto por programas.

111. **El Sr. González Behmaras** (Cuba), presentando el proyecto de resolución en nombre del Movimiento de Países No Alineados, dice que el texto representa en su mayoría una actualización técnica de la resolución aprobada en el septuagésimo sexto período de sesiones. Se introduce lenguaje sobre la necesidad de fortalecer los esfuerzos por aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Viena y la Declaración Universal de Derechos Humanos. El proyecto de resolución, que se ajusta plenamente a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y al espíritu pluralista y multicultural de la Organización, debería aprobarse por consenso.

112. **El Sr. Merron** (Estados Unidos de América), en explicación de voto antes de la votación, dice que su delegación sigue apoyando la promoción del pluralismo cultural, la tolerancia, la cooperación y el diálogo entre personas de diferentes culturas y civilizaciones. La diversidad de las sociedades contribuye a la fortaleza y diversidad de los Estados como miembros de instituciones, permitiéndoles abordar con mayor eficacia los problemas actuales en un mundo interconectado. Además, los Estados son responsables de cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. La cooperación internacional y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas es un compromiso clave, de conformidad con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas. Las comunidades históricamente desatendidas, en los Estados Unidos y en muchos otros países, desempeñan un papel crucial en la conformación de la historia y del mundo.

113. A pesar de su compromiso con la diversidad cultural, a los Estados Unidos les preocupa que la conceptualización de la diversidad en el proyecto de resolución pueda utilizarse indebidamente para elevar a una determinada nación, pueblo o grupo social por encima de otro, y para legitimar abusos contra los derechos humanos. Las actividades encaminadas a promover la diversidad cultural no deben menoscabar el disfrute de los derechos humanos ni justificar limitaciones irrazonables de su alcance. Al elevar el concepto de diversidad cultural al nivel de objetivo esencial sin reflejar la preocupación sobre su posible uso indebido, el proyecto de resolución también desvirtúa la relación entre la diversidad cultural y el

derecho internacional de los derechos humanos. Además, la delegación de los Estados Unidos considera que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura no debería emprender las iniciativas propuestas en el proyecto de resolución destinadas a promover el diálogo intercultural sobre los derechos humanos, y no apoya la solicitud que se formula en el proyecto de resolución de que se prepare un informe sobre su aplicación. Por esas razones, la delegación de los Estados Unidos votará en contra del proyecto de resolución.

114. *A petición del representante de los Estados Unidos de América, se procede a votación registrada sobre el proyecto de resolución A/C.3/78/L.44.*

Votos a favor:

Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Belice, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chad, Chile, China, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Líbano, Libia, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Palau, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Qatar, República Árabe Siria, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suriname, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabue.

Votos en contra:

Albania, Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia,

Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Micronesia (Estados Federados de), Mónaco, Montenegro, Nauru, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos (Reino de los), Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República de Moldova, Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Türkiye, Ucrania.

Abstenciones:

Ninguna.

115. *Por 130 votos contra 54, queda aprobado el proyecto de resolución A/C.3/78/L.44.*

Proyecto de resolución A/C.3/78/L.45: Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales

116. **El Presidente** dice que el proyecto de resolución no tiene consecuencias para el presupuesto por programas.

117. **El Sr. González Behmaras** (Cuba), presentando el proyecto de resolución en nombre del Movimiento de Países No Alineados, dice que el texto en su mayoría representa una actualización técnica de la resolución aprobada en el septuagésimo séptimo período de sesiones. Se introduce lenguaje sobre la necesidad de fortalecer los esfuerzos por aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Viena y la Declaración Universal de Derechos Humanos. El proyecto de resolución se sustenta en el hecho de que las medidas coercitivas unilaterales afectan al disfrute de todos los derechos humanos y en la firme oposición a la utilización de esas prácticas como herramienta de presión política y económica contra países en desarrollo. En el proyecto se aborda un tema existencial para muchos países. Al apoyar el proyecto de resolución, los países también estarán apoyando la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la plena realización de todos los derechos para todas las personas.

118. **El Sr. Merron** (Estados Unidos de América), en explicación de voto antes de la votación, dice que el proyecto de resolución no promueve el respeto ni la protección de los derechos humanos. Los Estados Unidos se comprometen a trabajar con todos los Estados para alcanzar objetivos comunes en la promoción de los derechos humanos; sin embargo, un pequeño número de Estados Miembros se empeña en impulsar una agenda políticamente motivada en relación con las llamadas medidas coercitivas unilaterales. Las sanciones

económicas son una herramienta legítima, adecuada y eficaz para responder a actividades perjudiciales y abordar las amenazas a la paz y la seguridad, y pueden utilizarse para fomentar la rendición de cuentas por las violaciones y los abusos de los derechos humanos, responder a comportamientos malintencionados y luchar contra la delincuencia transnacional, el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, las sanciones son una herramienta para promover cambios de comportamiento positivos y duraderos, y se trata de lograr esos objetivos con claridad y transparencia. Los Estados Unidos utilizan las sanciones de manera compatible con el derecho internacional y teniendo en cuenta esos objetivos, y otros países comparten esa opinión o práctica.

119. En el proyecto de resolución se cuestiona indebidamente la capacidad de los Estados para determinar sus relaciones económicas y proteger intereses nacionales legítimos, incluida la adopción de medidas en respuesta a preocupaciones de seguridad nacional. También se intenta socavar la capacidad de la comunidad internacional de responder a las violaciones y abusos de los derechos humanos. Los Estados Unidos son conscientes de las consecuencias imprevistas que pueden tener las sanciones, y lo que pretenden es limitar los abusos por parte de los Gobiernos, no perjudicar a su población. La delegación de los Estados Unidos es una de las corredactoras de la resolución [2664 \(2022\)](#) del Consejo de Seguridad, que se elaboró con vistas a facilitar el suministro de ayuda humanitaria a los necesitados en todos los regímenes de sanciones de las Naciones Unidas, ayudando al mismo tiempo a velar por que esa ayuda no fuera desviada o utilizada indebidamente por agentes malintencionados. Los Estados Unidos disponen de numerosas autorizaciones humanitarias y programas de sanciones nacionales concebidos para garantizar que sus sanciones incidan en los objetivos previstos y las consecuencias imprevistas para las personas inocentes sean limitadas. Los que sugieren que las sanciones son inherentemente injustificadas promueven un argumento falso, que la delegación de los Estados Unidos no puede defender. Las sanciones no tienen como objetivo debilitar el respeto por los derechos humanos, sino a quienes cometen violaciones y abusos de los derechos humanos. Por esas razones, la delegación de los Estados Unidos ha solicitado una votación y votará en contra del proyecto de resolución.

120. **El Sr. Mahamadou Seydou** (Níger), en explicación de voto antes de la votación, dice que, tras el cambio de régimen en el Níger el 26 de julio de 2023, los Jefes de Estado de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) celebraron

dos sesiones extraordinarias y decidieron imponer un bloqueo general en el Níger. El bloqueo supuso la congelación de todas las transacciones de servicios, incluidos los servicios públicos; la suspensión de todas las transacciones comerciales y financieras; y el cierre de las fronteras terrestres y aéreas entre el Níger y otros Estados miembros de la CEDEAO. Esas sanciones son ilegales, inhumanas e injustas, y contravienen los objetivos y principios fundamentales establecidos en el Tratado Revisado de la CEDEAO y sus Normas Complementarias y Protocolos. También son contrarias al Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y al artículo 23 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

121. Las sanciones ilegales impuestas al Níger tienen efectos devastadores en las mujeres y los niños, que se ven privados de sus derechos fundamentales a la salud y a la alimentación debido al bloqueo de la cadena de suministro de productos farmacéuticos y esenciales. Por ello, la delegación del Níger acoge con satisfacción el examen por parte de la Tercera Comisión del proyecto de resolución, que establece que las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional, el derecho internacional humanitario, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados. El Níger insta a todos los Estados a que se abstengan de adoptar ese tipo de medidas, que vulneran el derecho internacional e impiden a las mujeres y, en especial, a los niños ejercer sus derechos fundamentales, entre ellos, los relacionados con la alimentación. Por consiguiente, el Níger votará a favor del proyecto de resolución y exhorta a las demás delegaciones a que hagan lo mismo.

122. *A petición del representante de los Estados Unidos de América, se procede a votación registrada sobre el proyecto de resolución [A/C.3/78/L.45](#).*

Votos a favor:

Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Belice, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chad, Chile, China, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kazajstán,

Kenya, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Líbano, Libia, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Qatar, República Árabe Siria, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suriname, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turkmenistán, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Votos en contra:

Albania, Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Islas Marshall, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Micronesia (Estados Federados de), Mónaco, Montenegro, Nauru, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos (Reino de los), Palau, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República de Moldova, Rumania, San Marino, Suecia, Suiza, Türkiye, Ucrania.

Abstenciones:

Ninguna.

123. *Por 128 votos contra 54, queda aprobado el proyecto de resolución A/C.3/78/L.45.*

124. **El Sr. Poveda Brito** (República Bolivariana de Venezuela), hablando en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, dice que el Grupo condena enérgicamente la sostenida y cada vez mayor aplicación de medidas coercitivas unilaterales destinadas a promover agendas intervencionistas y de desestabilización tanto de carácter político como económico. Esas medidas impiden y dificultan el acceso a los bienes y servicios básicos; proporcionan una supuesta cobertura legal para la confiscación de los recursos soberanos; y afectan gravemente a las políticas y capacidades de los Gobiernos de más de 30 países en todo el mundo, incluso en relación con la implementación de la Agenda 2030.

125. Es inmoral y completamente contradictorio que algunos Gobiernos se presenten como campeones o promotores de los derechos humanos mientras cometen violaciones masivas y crímenes de lesa humanidad mediante la aplicación ilegal de medidas coercitivas unilaterales. Lamentablemente, ese tipo de medidas, ya sean de naturaleza política o económica, se han convertido en la herramienta preferida de algunos Estados para ejercer presión, especialmente sobre países en desarrollo, con el fin de obtener ventajas. Esas medidas también representan una violación masiva de los derechos humanos de más de un tercio de la humanidad y un ataque directo a uno de los principales pilares de la Organización.

126. El Grupo insta a los Estados a que se abstengan de aplicar cualquier medida coercitiva unilateral de carácter económico, financiero o comercial que impida la plena consecución del desarrollo socioeconómico, en particular contra los países en desarrollo, dado el impacto negativo que tienen en el pleno disfrute de los derechos humanos.

127. **La Sra. Alonso Giganto** (España), hablando en nombre de la Unión Europea, dice que la Unión Europea y sus Estados miembros acogen con satisfacción la incorporación de referencias a los aniversarios de la Declaración y el Programa de Acción de Viena y de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el proyecto de resolución. Sin embargo, esos cambios no abordan las principales preocupaciones que se desprenden del texto y, por lo tanto, la Unión Europea y sus Estados miembros han votado en contra. La Unión Europea impone medidas restrictivas de plena conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y es uno de los principales donantes de ayuda internacional en el mundo, también para los países a los que se aplican sanciones.

128. Las medidas restrictivas de la Unión Europea son siempre selectivas y cuidadosamente graduadas, dirigidas a los responsables de las políticas o acciones. Las medidas se adhieren plenamente a los principios humanitarios y se ajustan al derecho internacional humanitario, y se elaboran de forma que se evite cualquier consecuencia adversa para la seguridad alimentaria en todo el mundo. Por eso, los productos agrícolas y alimentarios, incluidos los cereales y fertilizantes, los medicamentos y otros suministros de emergencia, nunca son objeto de sanciones de la Unión Europea. Además, dichas sanciones solo se aplican dentro de la jurisdicción de la Unión. La Unión Europea y sus Estados miembros están dispuestos a colaborar con las Naciones Unidas y todos sus Estados Miembros en el cumplimiento de las responsabilidades

compartidas y en la defensa de la Carta, incluso a través de la promoción y el respeto de los derechos humanos.

129. **La Sra. Lundy** (Reino Unido) dice que su país se opone al proyecto de resolución. Las sanciones selectivas forman parte de una estrategia de política exterior amplia y proporcionada, y se imponen con fines específicos, centrándose en evitar y limitar los abusos y violaciones graves de los derechos humanos, las infracciones del derecho internacional, la proliferación y la obstrucción de los procesos de paz. En ese sentido, no son incompatibles ni están en oposición con la Carta de las Naciones Unidas. Las sanciones autónomas del Reino Unido prevén una serie de excepciones y motivos para conceder autorizaciones cuando proceda y sea necesario, entre otros, para apoyar las actividades de ayuda humanitaria. La delegación del Reino Unido seguirá oponiéndose sistemáticamente a las propuestas de redacción o a las resoluciones que intenten distorsionar el concepto de las sanciones con el fin de evitar la difusión de información errónea sobre ellas para promover agendas políticas.

130. **La Sra. Nishihara** (Chile) dice que su delegación ha apoyado el proyecto de resolución, en tanto entiende que las medidas coercitivas unilaterales son incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas y los principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados. Esas medidas pueden repercutir negativamente en el disfrute de los derechos humanos, así como en el libre comercio y en la cooperación internacional entre Estados, amenazando la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, muchas veces esas medidas tienen un efecto desproporcionado en los grupos de personas más vulnerables y pueden desencadenar graves consecuencias humanitarias.

131. El multilateralismo, la solución pacífica de los conflictos y el diálogo constructivo entre los Estados bajo el amparo de las Naciones Unidas son los principios rectores de la política exterior chilena. Bajo esos preceptos, Chile apoya la aprobación del proyecto de resolución, que, sin embargo, no debe interpretarse como un apoyo a aquellos regímenes de gobierno o personas responsables de violaciones y abusos graves de los derechos humanos en todo el mundo y que han sido objeto de medidas coercitivas unilaterales. La delegación de Chile hace un llamamiento a que los debates sobre las medidas coercitivas unilaterales y su impacto en los derechos humanos se lleven a cabo con imparcialidad y objetividad, y rechaza categóricamente la utilización del proyecto de resolución con fines políticos, ya que su espíritu debe enfocarse estrictamente en la protección de los derechos humanos de las personas afectadas por esas medidas.

132. **El Sr. Pilipenko** (Belarús) dice que su delegación acoge con beneplácito el proyecto de resolución. Las medidas unilaterales adoptadas sin la autorización del Consejo de Seguridad o al margen de ella que no puedan considerarse retorsiones o contramedidas son ilícitas con arreglo al derecho internacional y han sido condenadas en numerosas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General. El proyecto de resolución detalla los efectos destructivos de las sanciones sobre los derechos humanos. Las sanciones económicas, financieras y comerciales, así como los embargos de envíos, afectan negativamente a toda la población del país sometido a sanciones. Agravan la situación económica de los países; dificultan el acceso a medicamentos, alimentos y otros productos básicos; obstaculizan el funcionamiento de la infraestructura pública; y vulneran los derechos humanos de toda la población.

133. A pesar de los comentarios del representante de los Estados Unidos, la poca claridad del fundamento para la imposición de medidas unilaterales secundarias; la aplicación deliberada de requisitos difíciles para la reconsideración de las sanciones vigentes; la limitación del acceso a la justicia en el contexto de las sanciones secundarias; y el fenómeno de la jurisdicción extraterritorial constituyen el lado oscuro de las sanciones, del que no hablan los partidarios de instrumentalizar los derechos humanos con fines políticos. Por ello, Belarús pide que se ponga fin de forma integral, inequívoca e irreversible al uso de medidas coercitivas unilaterales.

134. **El Sr. González Behmaras** (Cuba) dice que es necesario aclarar algunas cuestiones planteadas por la delegación de los Estados Unidos en relación con el proyecto de resolución. El proyecto de resolución es sobre medidas coercitivas unilaterales, que están muy bien definidas en el texto, y no tienen nada que ver con lo que puede ocurrir en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Además, el proyecto de resolución acota claramente las medidas coercitivas unilaterales pertinentes, que son las contrarias a la Carta y al derecho internacional. Es posible que los Estados Unidos no logren entender esa sutil pero clara diferencia entre esas medidas definidas en el texto. Además, la delegación de los Estados Unidos ha dicho que la justificación para pedir la votación y para aplicar medidas coercitivas unilaterales tiene que ver con las supuestas violaciones de los derechos humanos en un país determinado. El orador pregunta dónde están las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos a raíz del genocidio en Gaza, y si su delegación adopta un enfoque selectivo en cuanto a las violaciones de los derechos humanos que ese país quiere perseguir.

135. Se ha hablado de que las medidas coercitivas unilaterales no tienen un impacto humanitario indiscriminado, y eso es falso. Todo el pueblo cubano está sometido al cotidiano y muy negativo impacto del bloqueo económico, comercial y financiero sobre sus derechos humanos, impuesto injustamente por los Estados Unidos desde hace 60 años, y todo ello por la osadía del pueblo cubano de querer ser libres y escoger su propio camino. La única verdad que ha dicho la delegación de los Estados Unidos en su explicación de voto es que utiliza las medidas coercitivas unilaterales como herramienta de presión económica, lo que supone una afrenta a la igualdad soberana de los Estados Miembros y, por tanto, es una premisa inaceptable. Si todos los Estados Miembros son iguales, esa igualdad debe respetarse. No obstante, para los Estados Unidos es muy difícil aceptar que todos sean realmente iguales.

Proyecto de resolución A/C.3/78/L.46: El derecho al desarrollo

136. **El Presidente** dice que el proyecto de resolución no tiene consecuencias para el presupuesto por programas.

137. **El Sr. González Behmaras** (Cuba), presentando el proyecto de resolución en nombre del Movimiento de Países No Alineados, dice que el texto se corresponde en su mayoría con la resolución aprobada durante el septuagésimo séptimo período de sesiones. El proyecto de resolución se sustenta en el reconocimiento expreso del derecho al desarrollo como un derecho humano inalienable y parte integral de los derechos humanos fundamentales de los que deben disfrutar todas las personas. Además, en él se aborda el impacto de la pandemia de COVID-19 en el ejercicio del derecho al desarrollo.

138. El Movimiento ha decidido fortalecer el lenguaje sobre la implementación de la Declaración y el Programa de Acción de Viena y la Declaración Universal de Derechos Humanos e incluir una petición al Secretario General para que aborde la cuestión de la reforma de la arquitectura financiera internacional en su próximo informe. En el texto también se toma nota de la decisión del Consejo de Derechos Humanos, a través de su resolución 54/18, de presentar a la Asamblea General el proyecto de pacto internacional sobre el derecho al desarrollo para su examen, negociación y posterior aprobación. Aunque ese proceso será complejo, el Movimiento está determinado a llevarlo a buen puerto. Los nuevos elementos introducidos son resultado de negociaciones transparentes y abiertas a todas las delegaciones, y se sustentan en la innegociable e inequívoca existencia del derecho al desarrollo, en consonancia con la resolución 41/128 de la Asamblea

General y la Agenda 2030. Al votar a favor del proyecto de resolución, las delegaciones estarán apoyando el reconocimiento y la promoción de ese derecho humano, en virtud del cual todas las personas y pueblos están facultados para participar en el desarrollo económico, social, cultural y político.

139. **El Sr. Merron** (Estados Unidos de América), en explicación de voto antes de la votación, dice que el compromiso con el desarrollo constituye el núcleo mismo de la política exterior estadounidense. Los Estados Unidos han proporcionado más ayuda exterior que ningún otro país, aportando más de 3,75 billones de dólares desde la Segunda Guerra Mundial, siguen siendo el mayor donante bilateral y colaboran con países de todo el mundo para apoyar sus prioridades de desarrollo. En los dos años anteriores, el Gobierno de los Estados Unidos invirtió más de 100.000 millones de dólares para impulsar el progreso en materia de desarrollo, y movilizó miles de millones más para fomentar mejoras en el sector privado. Además, los Estados Unidos siguen firmemente decididos a implementar plenamente la Agenda 2030 para defender la dignidad inherente a todo ser humano, y acogen con satisfacción la colaboración internacional para forjar alianzas para el desarrollo más inclusivas.

140. Aunque no cabe duda alguna sobre la importancia del desarrollo, a la delegación de los Estados Unidos le preocupa que el proyecto de resolución cree argumentos perjudiciales que eleven el proceso de desarrollo por encima de los derechos humanos, socaven el sistema de derechos humanos y perjudiquen el desarrollo en lugar de promoverlo. En el proyecto de resolución se cambia de planteamiento pasando de un enfoque en el que se respeta la importancia central del derecho humano al desarrollo a otro en el que se da prioridad al desarrollo por encima de los derechos humanos, modificando así el equilibrio mantenido durante décadas entre esos dos aspectos fundamentales. El derecho al desarrollo tal como aparece en el texto parece proteger a los Estados y no a las personas. Los Estados no tienen derechos humanos, sino que se los garantizan a las personas.

141. El derecho al desarrollo no está reconocido en ninguna de las convenciones sobre los derechos humanos, no tiene un significado acordado a nivel internacional y no está establecido como un derecho universal que poseen y disfrutan las personas. La delegación de los Estados Unidos está preocupada por el instrumento jurídicamente vinculante propuesto, por la falta de negociaciones significativas al respecto y porque no cuenta con completo apoyo. Además, la referencia en el proyecto de resolución al proyecto de pacto internacional es motivo de preocupación, ya que implica que se situaría a la altura del Pacto Internacional

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por ese motivo, los Estados Unidos votarán en contra del proyecto de resolución, y, al mismo tiempo, mantienen su compromiso con la plena implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional y en el extranjero, con vistas a ampliar las oportunidades económicas, avanzar en la justicia social, cuidar el planeta, promover la buena gobernanza y garantizar que no se deje a nadie atrás.

142. *A petición del representante de los Estados Unidos de América, se procede a votación registrada sobre el proyecto de resolución A/C.3/78/L.46.*

Votos a favor:

Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Belice, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chad, China, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Federación de Rusia, Fiji, Filipinas, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenya, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Qatar, República Árabe Siria, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Singapur, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suriname, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Türkiye, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Votos en contra:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría,

Israel, Japón, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Nueva Zelandia, Países Bajos (Reino de los), Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Suecia, Suiza, Ucrania.

Abstenciones:

Albania, Andorra, Australia, Canadá, Chile, Chipre, Eslovenia, España, Georgia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, México, Mónaco, Montenegro, Noruega, Portugal, República de Corea, República de Moldova, San Marino, Uruguay.

143. Por 131 votos contra 26 y 25 abstenciones, queda aprobado el proyecto de resolución [A/C.3/78/L.46](#).

144. **La Sra. Alonso Giganto** (España), hablando en nombre de la Unión Europea, dice que la Unión Europea y sus Estados miembros están plenamente comprometidos con el fomento y el apoyo del desarrollo sostenible en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las instituciones de la Unión Europea, junto con sus Estados miembros, representan la mayor parte del total de la ayuda oficial para el desarrollo a nivel mundial. Además, la Unión Europea promueve un enfoque basado en los derechos humanos para un desarrollo inclusivo y sostenible, y se esfuerza por apoyar las capacidades de sus países asociados para que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos al tiempo que fomenta las reformas legislativas y jurídicas, la creación de instituciones y la concienciación, que también facilita a los titulares de derechos la reivindicación de los mismos. El derecho al desarrollo debe estar enraizado en la naturaleza universal, indivisible, interrelacionada e interdependiente de todos los derechos humanos, lo que significa que no puede ser singularizado ni utilizado como pretexto por los Estados para no proteger, promover y cumplir con los derechos humanos.

145. Aunque la Unión Europea y sus Estados miembros respetan la decisión de limitar los cambios en el texto a modificaciones técnicas en el período de sesiones en curso, la Comisión no ha tenido la oportunidad de considerar debidamente el resto del proyecto de resolución, lo que significa que no han podido abordarse muchas de las preocupaciones de larga data de la Unión Europea y sus Estados miembros. El texto examinado también incluye una referencia a las deliberaciones en el Consejo de Derechos Humanos sobre un proyecto de instrumento relativo al derecho al desarrollo, pese a que aún quedan muchas cuestiones pendientes y opiniones divergentes sobre el fondo y la forma de dicho instrumento. Hay que trabajar mucho para alcanzar el

consenso a ese respecto celebrando negociaciones transparentes e inclusivas.

146. **La Sra. Pizarro-viales** (Costa Rica) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto de resolución, reafirmando su pleno apoyo a la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y la promesa de hacer de los derechos humanos una realidad para todos. Sin embargo, el nuevo párrafo 7 es motivo de preocupación. El derecho al desarrollo está basado en la naturaleza universal, indivisible, interrelacionada e interdependiente del derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, los Estados tienen el deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización, no solo del derecho al desarrollo, sino de todos los derechos humanos. Además, ningún Estado puede invocar la falta de desarrollo como justificación para limitar los derechos humanos, tal y como se establece en la Declaración y el Programa de Acción de Viena.

147. Costa Rica se abstuvo en la votación de la resolución 54/18 del Consejo de Derechos Humanos, porque consideró prematuro haber cerrado las discusiones en Ginebra sin llegar a un consenso sobre un proyecto antes de remitir el asunto a la Asamblea General. Un instrumento jurídicamente vinculante eficaz sobre el derecho al desarrollo requiere amplios acuerdos sobre su necesidad y sustancia. Lamentablemente, se han ignorado los llamamientos de un importante número de Estados latinoamericanos para que no se apresuren los debates en Ginebra. Mirando hacia adelante, la delegación de Costa Rica espera que prevalezca el espíritu de diálogo, cooperación y voluntad política, a través de negociaciones inclusivas, transparentes y abiertas que cuenten con una participación significativa de la sociedad civil con el fin de llegar a un consenso.

148. **El Sr. Escobar** (Argentina) dice que, aunque la delegación de la Argentina ha votado a favor del proyecto de resolución, aún no existe una posición nacional unívoca respecto del proyecto de instrumento jurídicamente vinculante relativo al derecho al desarrollo. El debate sobre dicho instrumento debería haber continuado en el Consejo de Derechos Humanos, como principal órgano del sistema de derechos humanos para las deliberaciones intergubernamentales sobre estándares y normas.

149. **El Sr. Hakobyan** (Armenia) dice que su delegación concede la máxima importancia tanto al derecho al desarrollo como al derecho de los pueblos a la libre determinación, que están estrechamente vinculados, y que por ello ha votado a favor de los proyectos de resolución [A/C.3/78/L.45](#) y

[A/C.3/78/L.46](#). Sin embargo, Armenia desea desvincularse del sexto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución [A/C.3/78/L.45](#), y del vigésimo cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución [A/C.3/78/L.46](#), en los que se hace referencia a la 18ª Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados, en cuyo documento final figuran los argumentos unilaterales y contradictorios de la Presidencia saliente del Movimiento de Países No Alineados.

150. **La Sra. Lundy** (Reino Unido) dice que su país está orgulloso de su historial de liderazgo mundial en materia de desarrollo internacional. En el sector del desarrollo internacional no hay soluciones rápidas, y ningún país puede progresar a largo plazo sin un gobierno receptivo y capaz que respete los derechos humanos y defienda el Estado de derecho. El enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos se sustenta en la Agenda 2030. El desarrollo solo puede ser sostenible cuando no se deja a nadie atrás, y esos objetivos tan ambiciosos solo podrán alcanzarse a través de la colaboración.

151. El Reino Unido no discute en absoluto el derecho de todos los países a desarrollarse y crecer económicamente; sin embargo, ese enfoque no debería regirse por un nuevo tratado de derechos humanos. Aunque la delegación del Reino Unido seguirá participando en las negociaciones de buena fe, el tratado propuesto en el texto carece de un objetivo claro, en particular en lo que se refiere a qué nuevos derechos se establecen y para quién. Además, no incluye una definición clara del derecho al desarrollo; no se centra en las obligaciones de los Estados hacia las personas dentro de sus jurisdicciones; hace referencia a un amplio abanico de normas y conceptos que se están debatiendo en otros lugares y sobre los que no se ha llegado a un acuerdo; y carece de referencias a los derechos humanos clave que son esenciales para el desarrollo, en particular los derechos civiles y políticos. Además, la delegación del Reino Unido no está de acuerdo con que la capacidad de los Estados de proteger los derechos humanos esté vinculada a la deuda y a las obligaciones financieras, como se establece en el vigésimo sexto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución. La delegación del Reino Unido lamenta que ninguna de sus preocupaciones sobre el proyecto de tratado se haya reflejado en el texto final y, por ello, ha votado en contra del proyecto de resolución.

152. **El Sr. Oehri** (Liechtenstein), hablando también en nombre de Australia, Islandia y Noruega, dice que la Agenda 2030 representa un amplio programa de aplicación de la visión de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo

Sostenible pretenden crear un entorno propicio para la realización de los derechos humanos de todas las personas, y al mismo tiempo, en ellos se reconoce que la paz y el estado de derecho son esenciales para el desarrollo y que todos los Estados tienen la responsabilidad de garantizar la igualdad de oportunidades basada en la no discriminación.

153. La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo proporciona orientación suficiente sobre ese derecho, que debe basarse en el objetivo compartido de lograr un mundo más pacífico, justo y próspero para todos, así como también la universalidad de los derechos humanos. Sin embargo, la referencia a un instrumento jurídicamente vinculante sobre el derecho al desarrollo podría socavar el consenso y obstaculizar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El párrafo 7 del proyecto de resolución señala que el proyecto de pacto internacional fue presentado a la Asamblea General. Ese órgano está a cargo de examinar y negociar el documento. Las cuatro delegaciones no apoyan el proyecto de resolución, ya que puede causar más mal que bien por lo que respecta al logro del desarrollo sostenible y a garantizar que no se deje a nadie atrás. No obstante, esas delegaciones aguardan con interés un proceso de negociación abierto y transparente, en el que participen todos los Estados Miembros, y esperan que pueda alcanzarse un mayor consenso en cuanto al derecho al desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta los retos y el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19.

154. **La Sra. Buist-Catherwood** (Nueva Zelandia), hablando también en nombre de Suiza, dice que ambas delegaciones suscriben plenamente el objetivo de realizar el derecho al desarrollo para todos y reiteran su apoyo inquebrantable a la Agenda 2030, que se basa en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. El vínculo entre los derechos humanos y el desarrollo es inextricable, y los Estados son los principales responsables de garantizar el derecho al desarrollo de sus ciudadanos. Sin embargo, en el proyecto de resolución figuran conceptos poco claros que corren el riesgo de socavar la universalidad de los derechos humanos y sugieren que existe una jerarquía entre ellos. Para avanzar a escala mundial en el derecho al desarrollo, hay que tratar de conciliar las divisiones actuales.

155. Las delegaciones de Nueva Zelandia y Suiza reconocen la reciente presentación de un proyecto de pacto a la Asamblea General para su consideración; sin embargo, un nuevo instrumento jurídicamente vinculante sobre el derecho al desarrollo no será un mecanismo apropiado para avanzar. Además, los tratados de derechos humanos existentes ya ofrecen una

protección integral de los derechos humanos, y no existe un consenso internacional sobre la necesidad de un instrumento de ese tipo. Dada la divergencia de opiniones sobre el derecho al desarrollo y su aplicación, es importante trabajar juntos y tener en cuenta los puntos de vista de todos los Estados Miembros, con vistas a alcanzar un consenso. Por esas razones, ambas delegaciones han votado en contra del proyecto de resolución.

156. **La Sra. Nishihara** (Chile) dice que el compromiso de Chile con los derechos humanos es de carácter transversal y comprende los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Sin embargo, la delegación de Chile está preocupada por los acontecimientos en Ginebra y Nueva York, incluso en relación con el proyecto de resolución. Para que un instrumento jurídicamente vinculante sobre el derecho al desarrollo tenga solidez, es necesario que exista un amplio consenso en la comunidad internacional respecto a la necesidad de dicho tratado, así como una claridad absoluta sobre el contenido y el alcance de ese derecho. La reciente decisión del Consejo de Derechos Humanos de presentar un proyecto de pacto internacional a la Asamblea General es lamentable, ya que no cumple ninguna de las dos condiciones mencionadas. Además, en el proyecto de pacto internacional no se tiene en cuenta el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los importantes avances en materia de género, y se adopta un enfoque de derechos humanos selectivo. Es lamentable que se hayan ignorado los llamamientos de los países latinoamericanos a que se logre un mayor consenso en Ginebra. Por esos motivos, Chile se ha abstenido en la votación del proyecto de resolución.

157. **La Sra. Santa Ana Vara** (México) dice que su delegación se ha abstenido en la votación sobre el proyecto de resolución. México está comprometido con el desarrollo pleno e inclusivo, particularmente el de quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad. El derecho al desarrollo incluye la obligación correlativa de los Estados Miembros de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para su realización. No obstante, la delegación de México tiene algunas preocupaciones sobre el proyecto de resolución, que mantiene un enfoque que podría condicionar las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la cooperación internacional. Además, durante las negociaciones ha habido incertidumbre sobre la naturaleza del derecho al desarrollo, que a veces se confunde con los derechos

económicos, sociales y culturales. El derecho al desarrollo no puede ejercerse a menos que se realicen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, y el incumplimiento del derecho al desarrollo no puede servir de excusa para incumplir esos otros derechos. México también expresa reservas sobre varios elementos del proyecto de instrumento sobre el derecho al desarrollo, que carecen de claridad o implican retrocesos en las normas internacionales de derechos humanos. Por último, la delegación de México dice que sigue comprometida con la implementación de la Agenda 2030, que se centra en las personas y es plenamente coherente con los derechos humanos.

158. **La Sra. Wallenius** (Canadá) dice que su delegación apoya el concepto del derecho al desarrollo centrado en las personas, tanto en calidad de principal participante como de beneficiaria del desarrollo. Además, los derechos humanos de las personas deben integrarse en el proceso, los resultados y los objetivos del desarrollo como parte de un enfoque basado en los derechos humanos. La promoción de los derechos humanos tiene un poderoso efecto multiplicador sobre el desarrollo. En lugar de tratar de crear nuevas obligaciones jurídicas, como se propone en el proyecto de resolución, la comunidad internacional debe colaborar para compartir las mejores prácticas y fortalecer las iniciativas existentes a fin de que las personas y las comunidades puedan aprovechar plenamente su potencial de desarrollo teniendo en cuenta las obligaciones y los marcos internacionales vigentes en materia de derechos humanos.

159. Los programas de cooperación para el desarrollo deben fomentar la realización de los derechos humanos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, aumentando la capacidad de los Estados de cumplir sus obligaciones en ese ámbito y sensibilizando a los titulares de derechos, de modo que puedan conocer, comprender y reclamar esos derechos. El Canadá sigue decidido a implementar la Agenda 2030 y seguirá promoviendo los derechos humanos, que son esenciales para no dejar a nadie atrás.

160. **La Sra. Rizk** (Egipto) dice que, como miembro fundador del Movimiento de Países No Alineados, Egipto es un firme defensor del derecho al desarrollo, que sirve de traducción de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad e interrelación de todos los derechos humanos. El deber de cooperar es un principio bien establecido del derecho internacional. Por lo tanto, el derecho al desarrollo debe abordarse como un derecho colectivo e individual. La delegación de Egipto apoya plenamente la elaboración de un instrumento jurídicamente

vinculante sobre el derecho al desarrollo, que situaría ese derecho en pie de igualdad con todos los derechos humanos, como se pide en la Declaración y el Programa de Acción de Viena.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.